

Fecha 10.03.2026	Sección Revista	Página PP-3-4-13
----------------------------	---------------------------	----------------------------

EN REVISIÓN DEL T-MEC

TRUMP PRESIONA EN SECTORES ESTRATÉGICOS



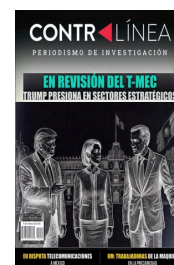
► INVESTIGACIÓN

PORTADA En revisión del T-MEC, Trump presiona en sectores estratégicos de México Nancy

Flores



Continúa en siguiente hoja



Página 1 de 13
\$ 2264148.00
Tam: 3924 cm2

Fecha 10.03.2026	Sección Revista	Página PP-3-4-13
----------------------------	---------------------------	----------------------------

EN REVISIÓN DEL T-MEC **TRUMP PRESIONA EN SECTORES ESTRATÉGICOS DE MÉXICO**

En el marco de la revisión del T-MEC, el presidente Donald Trump presiona para abrir sectores estratégicos que México ha recuperado a partir de la llegada de la 4T. En su lista de 54 barreras no arancelarias que pidió eliminar hay temas relacionados con las soberanías energética, alimentaria, farmacéutica, tecnológica y minera. Las quejas del gobierno estadounidense se centran en las “dificultades” que enfrentan compañías de ese país para tener negocios rentables o expandirlos, sobre todo en áreas de exclusividad para empresas

Continúa en siguiente hoja

Página 2 de 13

Fecha 10.03.2026	Sección Revista	Página PP-3-4-13
----------------------------	---------------------------	----------------------------

públicas (como Pemex y CFE) o prohibidas (como la explotación de litio por parte de la IP, el *fracking*, el maíz transgénico y la importación masiva de glifosato y otros herbicidas altamente tóxicos). Consultada al respecto, la presidenta Sheinbaum afirmó que no se cederá en temas soberanos

NANCY FLORES

El próximo 16 de marzo inicia la primera ronda oficial de revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC); previo a ello, el presidente Donald Trump pidió que se eliminen 54 barreras no arancelarias, entre las cuales se incluyen temas relacionados con las soberanías energética, alimentaria, minera, farmacéutica y tecnológica, pues –a su juicio– esto limita las capacidades de la relación comercial.

Las solicitudes del gobierno estadounidense –manifestadas por el propio Trump en julio de 2025, cuando otorgó una prórroga a México sobre los aranceles del 30 por ciento que buscaba imponer de forma generalizada– buscan superar las “dificultades” que enfrentan compañías de ese país para tener negocios rentables o expandirlos, sobre todo en áreas de exclusividad para el Estado mexicano o definitivamente prohibidas.

Según el *2025 National Trade Estimate Report on foreign trade barriers of the president of the United States on the Trade Agreements Program*, la Presidencia de EU considera como barreras no arancelarias la restricción de inversiones privadas en el sector energético; la prohibición del maíz transgénico; el *fracking* y la minería a cielo abierto; la estatización del litio; la denegación gradual de permisos para importar glifosato y otros plaguicidas, la reducción de permisos para siembra de algodón transgénico; las restricciones para la importación de papa fresca; la preponderancia de la privada Telmex-Telcel en el mercado de telecomunicaciones, entre otros rubros.

Consultada por *Contralínea* al respecto –en su conferencia del 3 de febrero pasado–, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se cederá en temas soberanos, y adelantó que la mayoría de las 54

barreras no arancelarias ya fue respondida.

“Son 54 [barreras no arancelarias que enunció el gobierno de Estados Unidos] que lleva ya tiempo trabajándose, varios meses. Ya prácticamente todos están saldados. Y hay algunos que no se puede hacer exactamente lo que ellos dicen. Por ejemplo, en el tema de... que ellos decían: ‘se están poniendo barreras al sector eléctrico’. Entonces decíamos: ‘bueno, pues no’. [Porque] sencillamente hay una nueva Constitución, hay una nueva ley que establece 54-46; hay 46 por ciento de oportunidad para inversión del privado”.

La primera mandataria confirmó a *Contralínea* que una de esas barreras que el gobierno de Trump pidió eliminar tiene que ver con el caso de la mina Calica. “Está el tema, en efecto, de Vulcan –se llama–, que es el área donde tenía una mina de explotación [de piedra caliza], que el presidente López Obrador [canceló]. Que se excedieron en el impacto ambiental que tenían, se explotó de más. Se declaró Área Natural Protegida. Ellos tienen una controversia relacionada con el Tratado, y se está buscando algún mecanismo, si hay una solución: que pudieran explotar en otro lugar que no sea área natural, con todos los criterios ambientales establecidos, y que esa zona, que finalmente es de su propiedad, se pueda dedicar a otros temas. Un puerto que ellos tienen, que pueda tener otros usos. Entonces, está en ese trabajo, todavía no hay un acuerdo en esa perspectiva”.

Sheinbaum Pardo agregó que en los 54 asuntos que se revisaron se encuentran “algunos temas de competencia relacionados con los nuevos organismos de competencia, la Comisión Nacional Antimonopolio. Y algunos otros temas como esos. [...]”

Fecha 10.03.2026	Sección Revista	Página PP-3-4-13
----------------------------	---------------------------	----------------------------

Lo lleva, toda la coordinación, la Secretaría de Economía. Pero nunca cedemos en nada que consideramos que vulnera, ni nuestra soberanía, ni nuestras leyes, ni nuestro proyecto”.

—¿Pero la mayoría no iba en ese sentido, o sea, de poner en riesgo nuestra soberanía? —se le preguntó a la presidenta de la República.

—No, no, para nada. Y mucho tenía que ver con aclaraciones de temas que ‘se suponían que estaban violando el Tratado’, y que se demostró que no violaban el Tratado.

Las “barreras no arancelarias” de México, según Trump

El *2025 National Trade Estimate Report on foreign trade barriers* revela los rubros en los que el gobierno de Donald Trump ha presionado a México, en el marco de la próxima revisión del T-MEC. Entre éstos, destacan las supuestas barreras a la inversión en el sector energético, pues se privilegia que la explotación del petróleo la haga Pemex, se restringe al 46 por ciento la participación privada en el sector eléctrico (el 54 por ciento está reservado para la CFE); y se prohíbe definitivamente el *fracking*. En el ámbito minero, el gobierno estadounidense critica que sólo la empresa estatal LitioMX esté autorizada para explotar ese metal estratégico.

Estas áreas estratégicas, vinculadas a temas de la soberanía nacional, fueron recuperadas a partir de la llegada de la llamada cuarta transformación (primero, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y ahora con la presidenta Sheinbaum). Incluso, el propio informe estadounidense así lo reconoce: “desde diciembre de 2018, México ha aplicado una política energética centrada en restablecer la primacía de su empresa eléctrica estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de la empresa estatal de petróleo y gas, Petróleos Mexicanos (Pemex)”.

Agrega que “las empresas privadas que operan en México a menudo no pueden participar de manera efectiva, o incluso no pueden, en el sector energético mexicano debido a frecuentes retrasos, rechazos inexplicables o injustificados, y la inacción con respecto a las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de permisos”. Y critica que, en junio de 2022, la Secretaría de Energía anunció una

nueva política que exigiría a los usuarios de la red de transporte de gas abastecerse de gas natural de Pemex o de la CFE, por lo que “varias” empresas estadounidenses salieron del mercado energético mexicano. Y en julio de 2022, Estados Unidos solicitó consultas con México bajo el Capítulo 31 del T-MEC respecto a estas medidas.

No obstante, el sector petrolero no está totalmente cerrado a las inversiones estadounidenses: un reporte del Departamento de Comercio estadounidense, del 12 de febrero de 2026, apunta que los operadores privados que aseguraron bloques durante las rondas de licitación 2015-2018 continúan con labores de exploración y desarrollo, e incluso campañas de perforación, estudios sísmicos y construcción de plataformas en alta mar en el Golfo de México. “Las empresas estadounidenses son participantes clave y están buscando activamente tecnología, equipos y socios de servicio para ayudar a cumplir con los tiempos de producción y mejorar la eficiencia tanto en operaciones en aguas profundas como en tierra”.

A ello se suma que “el plan de inversión 2025-2030 de Pemex exige el desarrollo de 18 nuevos campos, la construcción de 15 plataformas y la perforación en los campos existentes de aguas poco profundas y en tierra, que mantendrán la demanda de plataformas, *derricks*, sistemas submarinos y servicios de pozos”. El Departamento de Comercio incluso indica que los proyectos intermedios presentan oportunidades para los proveedores estadounidenses de equipos, ingeniería y servicios de EPC. Y como ejemplo, cita que México planea instalar más de 14 ductos (175 kilómetros), construir y ampliar terminales de almacenamiento, y modernizar su red de refinación, incluidas seis refinerías existentes y la instalación casi completa de Dos Bocas en Tabasco.

“Estos proyectos requieren bombas, compresores, sistemas de control y servicios de construcción, y están sujetos a requisitos de contenido local del 25 por ciento (aumentando al 35 por ciento para 2025). Las empresas estadounidenses con tecnología competitiva y asociaciones locales están bien posicionadas para participar, particularmente en proyectos para mejorar la capacidad de desulfuración y satisfacer la creciente demanda de combustibles más limpios en México”.

Fecha 10.03.2026	Sección Revista	Página PP-3-4-13
---------------------	--------------------	---------------------

Áreas que EU busca liberar para la IP

No obstante lo anterior, el informe de la Presidencia estadounidense sobre barreras no arancelarias se queja de que en octubre de 2024 –ya con la presidenta Claudia Sheinbaum–, México ratificó una enmienda constitucional para reclasificar a la CFE y Pemex como empresas públicas, en lugar de empresas productivas, “con el fin de socavar la participación de empresas pri-

vadas,

incluidas las estadounidenses, en el mercado energético mexicano”.

Agrega que en enero de 2025, la presidenta Sheinbaum “presentó un paquete de reformas con seis proyectos de ley relacionados con la energía que, entre otras cosas, incluyen como principio garantizar la prevalencia de la CFE y su mantenimiento de al menos el 54 por ciento de la energía promedio enviada a la red, exigir la participación de la CFE en al menos el 54 por ciento de cualquier proyecto de generación eléctrica de ‘inversión mixta’ y establecer una preferencia para la CFE sobre los particulares en la generación y comercialización de electricidad”.

También manifiesta su rechazo a la probable prohibición del *fracking* (extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos mediante fracturación hidráulica), considerada no sólo como una técnica altamente contaminante, sino como derrochadora de agua limpia.

Asimismo, Estados Unidos se queja de la política pública mexicana en materia de minería, que prohíbe esta actividad extractiva a cielo abierto; y de la estatización del litio –promovidas por los gobiernos de la 4T–. Según el gobierno de Trump, las enmiendas legislativas establecen que “la exploración, explotación y utilización del litio mexicano [queda] bajo el control exclusivo de una empresa estatal de nueva creación, LitioMx, y excluyen a las empresas privadas de concesiones, licencias, contratos, permisos y autorizaciones para realizar dichas actividades”.

La Presidencia de Estados Unidos también atribuye restricciones al T-MEC por barreras a la inversión en los ámbitos de infraestructura de transporte, pues argumenta que dicha área está totalmente cerrada a la inversión extranjera. Además, se cuestiona la limitación al 49 por ciento de la propiedad

extranjera para empresas de mensajería urgente, de terrenos para fines agrícolas, ganaderos y forestales, así como para servicios de administración portuaria.

Amenaza a soberanía alimentaria

Otro de los rubros en los que el gobierno de Trump ha mostrado interés está relacionado con la soberanía alimentaria de México. Al identificar barreras sanitarias y fitosanitarias que supuestamente limitan el T-MEC, el *2025 National Trade Estimate Report on foreign trade barriers* señala la inconformidad de la Presidencia estadounidense respecto de la prohibición del maíz genéticamente modificado, y se manifiesta contra la Ley de Bioseguridad de México, que pone límites a productos transgénicos.

Incluso, refiere el panel del T-MEC sobre maíz transgénico, que en diciembre de 2024 falló contra México en la disputa que abrió Estados Unidos, luego de que el gobierno del presidente López Obrador publicó un decreto para prohibir el consumo humano de ese grano modificado genéticamente, y con ello proteger el principal reservorio de ese alimento.

Constituido conforme al capítulo 31 (solución de controversias) del T-MEC, el panel resolvió que algunos elementos del *Decreto sobre el glifosato y maíz genéticamente modificado* –publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 13 de febrero de 2023– no pueden aplicarse “al no estar basadas en una evaluación de riesgo adecuada, evidencia científica y en normas internacionales relevantes”.

Al respecto, el informe de la oficina de la Presidencia estadounidense sobre las barreras no arancelarias señala: “en junio de 2024, Estados Unidos participó en una audiencia ante el panel de resolución de disputas. En diciembre de 2024, se publicó el informe final del panel que coincidió con Estados Unidos en las siete reclamaciones legales bajo el T-MEC. El 5 de febrero de 2025, México publicó una medida que declara ineficaces las medidas que el Representante Comercial de Estados Unidos impugnó con éxito en la disputa del T-MEC. Estados Unidos continuará monitoreando de cerca el cumplimiento de México con sus compromisos en el marco del T-MEC para garantizar que sus medidas de biotecnología agrícola se basen en la ciencia y brinden a los productores de maíz estadounidenses el acceso al mercado que México acordó otorgar en el T-MEC”.

En ese mismo apartado, rechaza la prohibición

Fecha 10.03.2026	Sección Revista	Página PP-3-4-13
----------------------------	---------------------------	----------------------------

gradual que nuestro país busca aplicar al glifosato y a otros plaguicidas y productos químicos agrícolas altamente tóxicos. Y se queja de las limitaciones a sus exportaciones de papa fresca, y las restricciones de permisos para que empresas estadounidenses siembren algodón transgénico en territorio mexicano.

Las otras supuestas barreras

Como parte de las supuestas limitaciones al T-MEC, el gobierno de Estados Unidos también identifica barreras aduaneras y de facilitación del comercio. En ese sentido, observa que, “con frecuencia”, México notifica nuevos requisitos aduaneros o fiscales apenas dos semanas antes de su entrada en vigor, “lo que deja a los exportadores estadounidenses con poco tiempo para adaptar sus sistemas y cumplir con el cambio”.

También pide que se elimine la restricción que se aplica en algunos puertos para la entrada de mercancías: “el T-MEC prohíbe límites arbitrarios en el número de puertos en los que un agente aduanal puede operar. Sin embargo, el artículo 161 de la Ley Aduanera de México limita la operación de un agente a cuatro puertos si no forma parte de una agencia aduanal. Estados Unidos sigue instando a México a modificar la ley para permitir que los agentes operen en cualquier puerto donde puedan desempeñar sus funciones”.

Además, cita barreras de acceso al mercado de dispositivos médicos, suministros y productos farmacéuticos. En ese tema, señala que la Cofepris debería acelerar los permisos.

En materia de protección de la propiedad intelectual, el gobierno estadounidense insta a nuestro país a acelerar el registro de patentes y marcas, pero también a frenar la venta de productos falsificados o pirata. Y como ejemplo de estas ventas, indica que “los mercados El Santuario y San Juan de Dios (en Guadalajara), así como Tepito (en la Ciudad de

México), figuran en la Revisión de Mercados Notorios de Falsificación y Piratería de 2024 (Lista de Mercados Notorios) por la venta de productos pirateados y falsificados”.

Adicionalmente, la administración de Donald Trump apunta que existen todavía barreras a los servicios de pagos electrónicos, de seguros y de telecomunicaciones. En este último rubro, se queja de la preponderancia de una empresa privada de origen mexicano: Telmex-Telcel (América Móvil), a la que acusa de tener acaparado el mercado.

Al respecto, apunta: “a pesar de las profundas reformas del sector de las telecomunicaciones en 2013 y 2014, los nuevos participantes en el mercado aún deben competir con el proveedor tradicional dominante que ha mantenido una participación de mercado de casi el 70 por ciento, y que fue designado como ‘agente económico preponderante’ por el IFT”.

Aunque no se refiera a Telmex-Telcel por su nombre, sí señala que “la posición arraigada de este proveedor dominante, en particular en el mercado de servicios móviles, demuestra la necesidad constante de una aplicación rigurosa de las regulaciones que el IFT adoptó para abordar su condición de agente económico preponderante”.

Por ello, critica la reforma constitucional de diciembre de 2024 para desaparecer organismos autónomos, pues sustituye al IFT por una nueva agencia de competencia antimonopolio, lo que podría beneficiar a Telmex-Telcel. ◀

“México reserva 54 por ciento del sector eléctrico a CFE y limita participación privada a 46 por ciento; para Estados Unidos es una barrera”

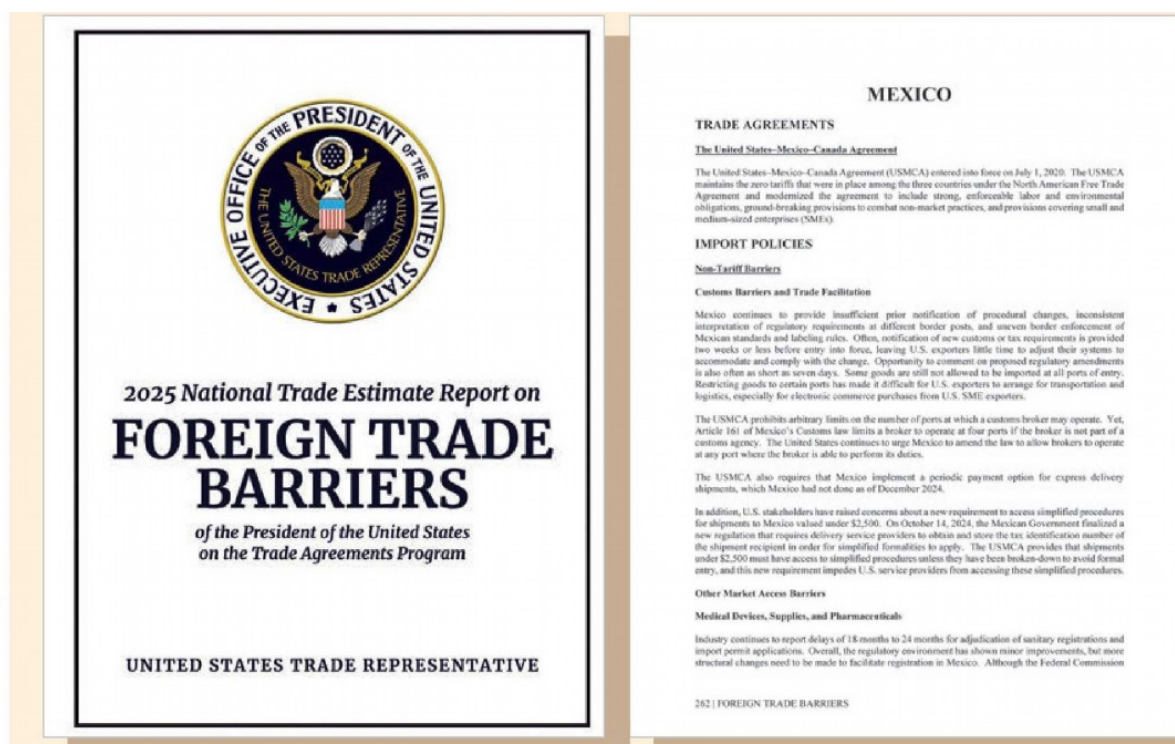
Fecha 10.03.2026	Sección Revista	Página PP.3-4-13
----------------------------	---------------------------	----------------------------



Continúa en siguiente hoja

Página 7 de 13

Fecha 10.03.2026	Sección Revista	Página PP.3-4-13
----------------------------	---------------------------	----------------------------



► El informe Foreign Trade Barriers critica prohibición de maíz transgénico y fracking en México

Fecha 10.03.2026	Sección Revista	Página PP-3-4-13
----------------------------	---------------------------	----------------------------

for Protection Against Sanitary Risks (COFEPRIS) continues to work through its backlog, companies that try to register U.S. Health and Human Services Food and Drug Administration (FDA)-approved products in Mexico continue to report delays of more than a year. Regulatory delay remains a primary barrier to entering the Mexican market for medical devices and pharmaceuticals. COFEPRIS reportedly continues to be understaffed, with insufficient capacity to grant sanitary registrations and conduct factory inspections to issue good manufacturing practices certifications within the established timeframes. COFEPRIS is in the process of implementing reliance mechanisms for approvals and inspections and, as part of these efforts, continues to hold technical regulatory discussions with the FDA to identify opportunities to improve its review process. Glyphosate Mexico's Secretariat of the Environment and Natural Resources (SEMARNAT) has rejected import permits for glyphosate-containing chemical products. Mexico has not provided an opportunity for public comment, submitted notifications to the World Trade Organization (WTO), or provided scientific evidence for the rejections. Glyphosate remains registered for use in Mexico. Separately, on January 1, 2021, a decree that called for the phaseout of the use of glyphosate and glyphosate-containing products by January 31, 2024, entered into force. The decree also prohibits Mexico from using glyphosate in any government-sponsored programs during the phaseout period. A subsequent decree, published on February 13, 2023, extended the phaseout deadline to March 31, 2024. During the phaseout period, Mexico's National Council of Humanities, Sciences and Technology was tasked with studying, developing, and promoting alternatives to glyphosate. On March 26, 2024, SEMARNAT, the Secretariat of Economy and Agriculture and Rural Development, and COFEPRIS announced the postponement of the phaseout of the use of glyphosate and glyphosate-containing products until a viable alternative is found. Mexico is implementing import quotas for glyphosate and glyphosate-containing products. On July 3, 2024, COFEPRIS reduced the quota for imports of glyphosate, to 1,138 tons of formulated glyphosate and 86 tons of technical glyphosate. The United States continues to press Mexico to grant import permits for glyphosate and glyphosate-containing products, consistent with the fact that glyphosate remains registered for use in Mexico. Pesticides and Agricultural Chemicals U.S. companies continue to report significant delays in receiving the necessary registration and marketing approvals from COFEPRIS for certain pesticides and agricultural chemicals. These delays appear to impact both applications for registration and applications for reregistration, sometimes involving only administrative updates such as changing the company's address. Companies report COFEPRIS is not granting registration renewals for many pesticide molecules. Consequently, some license holders have lost their registrations and the ability to import pesticides and agricultural chemicals. TECHNICAL BARRIERS TO TRADE / SANITARY AND PHYTOSANITARY BARRIERS <u>Technical Barriers to Trade</u> Implementing Regulation for the Quality Infrastructure Law In August 2024, Mexico published a draft implementing regulation for the July 2020 Quality Infrastructure Law on the National Regulatory Improvement Commission's (CONAMER) website. In comments FOREIGN TRADE BARRIERS 263	submitted to Mexico, the United States expressed serious disappointment with Mexico's decision to offer a period of only 10 business days to comment on the draft regulation. In addition, the United States emphasized concerns related to, and sought clarity on, how the regulation will impact matters including consideration of international standards and conformity assessment procedures in the development of Mexican technical regulations. The United States will continue closely monitoring the status of the draft regulation and urging Mexico to ensure the final measure is aligned with Mexico's USMCA obligations. Local Specific Absorption Testing Requirements The United States continues to express concerns with regulations that Mexico's telecommunications regulator, the Federal Telecommunications Institute (IFT), published in 2020 pursuant to Technical Provision IFT-012-2019 that pose a barrier to trade for mobile telecommunications products by requiring in-country testing for Specific Absorption Rates and reference out-of-date standards from the International Electrotechnical Commission/Institute of Electrical and Electronics Engineers and the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. The requirements include duplicative testing and may cause delays, as Mexico has a limited number of accredited facilities able to perform the required tests. The United States will continue to press Mexico to use the latest testing standards and to include testing to these standards in the scope of the Mutual Recognition Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the United Mexican States for Conformity Assessment of Telecommunications Equipment. Sanitary and Phytosanitary Barriers Fresh Potatoes Since 2003, the United States has sought access for fresh potatoes to all of Mexico, beyond a 26-kilometer zone along the U.S.-Mexico border outside of which imports were not permitted. In April 2021, the Supreme Court of Mexico affirmed the authority of Mexico's regulatory agency to expand access for U.S. fresh potatoes. Subsequently, in 2021, Mexico completed the regulatory steps necessary for access for U.S. fresh potatoes to cities with populations over 100,000 people. In May 2022, the United States began shipping fresh potatoes to Mexico beyond the 26-kilometer zone. The United States is monitoring the situation to ensure transparent and predictable access for U.S. exporters and that requirements are based on science. Products of Agricultural Biotechnology Mexico's Biosafety Law requires COFEPRIS to decide on a complete application for authorization covering the importation and sale of genetically engineered (GE) products within six months of receipt. The United States has expressed serious concerns that certain decisions on applications were not based on science and were subject to significant delays. On February 13, 2023, the Mexican Government published a decree that bans the use of GE corn in tortillas and dough and instructs Mexican Government agencies to gradually substitute—i.e., restrict and eventually ban—the use of GE corn in all products for human consumption and for animal feed. In March 2023, the United States requested and held technical consultations with Mexico regarding its measures concerning GE products under the USMCA Sanitary and Phytosanitary Measures Chapter, but the consultations did not resolve the matter. In June 2023, the United States requested and held dispute settlement consultations with Mexico regarding its measures under the USMCA Dispute Settlement Chapter, but these consultations also failed to resolve the matter. On August 17, 2023, the United States established a USMCA dispute settlement panel challenging the aforementioned measures reflected in Mexico's February 13, 2023, decree on the basis that these measures are not based on science and undermine the market access Mexico agreed 264 FOREIGN TRADE BARRIERS
--	---

► El informe de Estados Unidos señala restricciones de México en energía, minería y maíz transgénico

Fecha 10.03.2026	Sección Revista	Página PP.3-4-13
----------------------------	---------------------------	----------------------------



► FIFA reúne a gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026

Continúa en siguiente hoja

Página 10 de 13

Fecha	Sección	Página
10.03.2026	Revista	PP-3-4-13

to provide in the USMCA. In June 2024, the United States participated in a hearing before the dispute settlement panel. In December 2024, a final panel report was published, in which the panel agreed with the United States on all seven legal claims under the USMCA. On February 5, 2025, Mexico published a measure that declares ineffective the measures that USTR successfully challenged in the USMCA dispute. The United States will continue to monitor closely Mexico's compliance with its USMCA commitments to ensure that Mexico's agricultural biotechnology measures are based on science and provide U.S. corn growers the market access that Mexico agreed to provide in the USMCA.

Generically Engineered Cotton

Mexico rejected applications for cultivation of GE cotton in 2019 and 2020. No applications were submitted in 2021, 2022, and 2024. In 2021, companies submitted three applications for experimental field trials of new GE cotton varieties. Mexico had not decided on these applications as of December 31, 2024. GE cotton has been cultivated in Mexico for 25 years with no evidence of adverse impact on the environment, biodiversity, or animal or plant health. The United States continues to press Mexico to reconsider rejected applications, complete its approval procedure without undue delay, and use a science- and risk-based approval process.

INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION

Mexico was listed on the Watch List in the 2024 Special 301 Report. Obstacles to U.S. trade in intellectual property (IP) intensive goods and services include the wide availability of pirated and counterfeit goods, via both physical and online markets. As broadband access increases, so has online piracy, and stakeholders report that Mexico has one of the highest rates of music and video game piracy in the world. Overall criminal enforcement of IP rights, including online, continues to be characterized by weak coordination among federal, state, and municipal officials; limited resources for prosecutions; the lack of sustained investigations targeting suppliers of counterfeit and pirated goods and services; and the lack of sufficient penalties to deter violations. Brand owners also face high trademark registration costs, making it important for companies to register their trademarks early. Moreover, rights holders continue to express concern about the length of administrative and judicial patent and trademark infringement proceedings and the persistence of continuing infringement while cases remain pending. The El Sanuario and the Mercado San Juan de Dios markets in Guadalajara and the Tepito market in Mexico City are listed in the 2024 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy (Notorious Markets List) for selling pirated and counterfeit goods.

With respect to geographical indications (GIs), Mexico and the European Union (EU) concluded negotiations on a free trade agreement in which Mexico agreed to protect hundreds of names for foodstuffs, wines, and beers. The United States remains concerned about the EU practice of negotiating product-specific IP outcomes as a condition of market access and reiterates the importance of each individual IP right being evaluated on its individual merit in Mexico. In a USMCA side letter, Mexico confirmed that market access of U.S. products is not restricted in Mexico due to the mere use of certain individual cheese terms. Mexico has a sui generis system of protection for GIs that includes certain elements aimed at improving and respecting due process and transparency.

In 2026, Mexico enacted a new Federal Law for the Protection of Industrial Property and amended its Federal Copyright Law and Federal Criminal Code with a view to complying with various provisions of the USMCA and strengthening IP protection. Mexico is still in the process of drafting regulations for both the Federal Law for the Protection of Industrial Property and the Federal Copyright Law amendments, and the lack of regulations is creating uncertainty for the creative and innovative sectors looking to protect and enforce their IP. In June 2024, the Mexican Supreme Court upheld the constitutionality of Mexico's

USMCA implementing legislation related to copyright, specifically those that concern criminal sanctions for circumvention of technological protection measures and notice and takedown procedures.

SERVICES BARRIERS

Electronic Payments Services

The United States continues to closely monitor developments with respect to Mexico's evolving policy framework for electronic payment service suppliers. Aspects of the existing policy framework limit the ability of U.S. electronic payment service suppliers to supply their complete suite of value-added services on a cross-border basis, including fraud protection, and differentiate themselves in the marketplace. On September 14, 2023, Mexico's Federal Economic Competition Commission identified barriers to competition in the card payment processing market and issued recommendations to Mexico's Central Bank—Banxico—and the National Commission for Banking and Securities to restore conditions for competition. As Mexico considers updating its regulations, the United States continues to urge Mexico to facilitate a competitive market and level playing field for U.S. electronic payment service suppliers, aligned with Mexico's USMCA obligations.

Mexico issued regulations in 2021 relating to the use of cloud service suppliers by electronic payment fund institutions. The United States continues to be concerned by the length, complexity, and uncertainty of the approval process for electronic payment fund institutions that seek to use secure, U.S.-based cloud computing services, raising questions about the extent to which the approvals are tacitly being conditioned on using local computing facilities.

Insurance Services

Multiple U.S. companies report that Mexico's Tax Administration Service (SAT) has changed its interpretation of its laws and that, as a result, insurance companies have been required to retroactively pay value-added tax on damage claims stretching as far back as 2015. U.S. companies have expressed concerns that SAT is not applying the law in a sound and consistent manner and that this sudden change may lead to insolvency for some insurers in Mexico.

Telecommunications Services

Notwithstanding the sweeping reforms of the telecommunications sector in 2013 and 2014, new market entrants still must compete with the traditional dominant supplier, which has maintained a market share of almost 70 percent and was designated as a "preponderant economic agent" by the IFT. The entrenched position maintained by this dominant supplier, particularly regarding the mobile services market, demonstrates the continued need for vigilant enforcement of the regulations IFT adopted to address that supplier's status as a preponderant economic agent. A December 2024 constitutional amendment that eliminates certain independent, autonomous regulatory agencies in Mexico, including the IFT, has raised significant concerns regarding Mexico's continued compliance with its USMCA obligations. While IFT still existed as of December 2024, the Mexican Government plans to pass secondary laws that will place some IFT functions into a new digital transformation and telecommunications agency and other functions into a new anti-monopoly competition agency.

The cost of spectrum in Mexico is one of the highest in Latin America. Although Mexico assigns spectrum licenses through competitive auctions, it imposes a substantial annual fee based on the amount of spectrum held by each licensee. This approach is out of sync with international best practices. It appears that the structure of Mexico's annual spectrum fee may advantage the dominant supplier and led another supplier

► En el informe, Trump exige eliminar 54 barreras no arancelarias de México antes de la revisión del TMEC

Fecha 10.03.2026	Sección Revista	Página PP-3-4-13
----------------------------	---------------------------	----------------------------

to return to the Government of Mexico all the spectrum it had been awarded. The Government of Mexico dismissed several proposals to lower the costs made by the IFT and the private sector. The United States continues to press Mexico to consider changes to its rules that would lower overall costs for spectrum and address the market power of the dominant supplier. INVESTMENT BARRIERS Energy Sector Since December 2018, Mexico has pursued an energy policy centered on reinstating the primacy of its state-owned electric utility, Federal Electricity Commission (CFE), and state-owned oil and gas company, Mexican Petroleum (PEMEX). Mexico has undertaken various measures to achieve this aim. For example, in March 2021, the Mexican Congress amended its Electric Power Industry Law to require Mexico's national grid operator to prioritize the supply of CFE-generated electricity into the grid over electricity generated by private power companies, regardless of cost or environmental impact. Additionally, private companies operating in Mexico are often unable to participate effectively, if at all, in Mexico's energy sector due to frequent delays, unexplained or unjustified rejections, and inaction regarding applications for new permits or permit modifications. Unexplained or unjustified suspensions or revocations of existing permits, as well as other impediments, also undermine private companies' ability to operate renewable energy facilities (e.g., wind and solar installations), import or export electricity or fuel, store or transport fuel, and build or operate retail fuel stations. In addition, in December 2019, Mexico's energy regulator granted PEMEX an extension to 2026 to comply with maximum sulfur content requirements under its fuel standard for certain parts of Mexico. This extension temporarily exempts PEMEX from having to sell only ultra-low sulfur diesel fuel throughout the country. Without the extension, PEMEX would have had to import ultra-low sulfur diesel fuel from the United States or upgrade its facilities to produce ultra-low sulfur diesel in sufficient quantities. In June 2022, Mexico's Secretary of Energy announced a new policy that would require users of Mexico's gas transportation network to source natural gas from either PEMEX or CFE. Multiple U.S. companies have reported exiting Mexico's energy market as a direct consequence of these measures. In July 2022, the United States requested consultations with Mexico under USMCA Chapter 31 regarding these measures, and the United States continues to engage with Mexico in these consultations on specific and concrete steps Mexico must take to address the concerns set out in the consultations request. In January 2024, the Mexican Supreme Court found unconstitutional key parts of the 2021 amendment to the Electric Power Industry Law. However, in October 2024, Mexico ratified a constitutional amendment to reclassify CFE and PEMEX as "public enterprises" rather than "productive enterprises" in an effort to undermine the participation of private companies, including U.S. companies, in Mexico's energy market. In January 2025, President introduced a reform package of six energy-related bills that, <i>inter alia</i>, include as a principle a guarantee of CFE's prevalence and its maintenance of at least 34 percent of the average energy sent to the grid, require CFE ownership of at least 54 percent in any "mixed investment" electricity generation projects, and set out a preference for CFE over private individuals in electricity generation and marketing. Separately, in August 2024, the Constitutional Committee of Mexico's Chamber of Deputies approved a proposed constitutional amendment that would prohibit the extraction of liquid and gaseous hydrocarbons through fracking, except in cases determined by the Government of Mexico for strategic national development reasons. As of December 31, 2024, the proposed amendment has not yet been voted on by the full Chamber of Deputies. Mining Sector The Government of Mexico passed legislation in April 2022 amending the national mining law to establish greater state control over the country's lithium resources. The amendments place the exploration, exploitation, and utilization of Mexico's lithium under the exclusive control of a newly created state-owned company, LitioMéx, and exclude private companies from concessions, licenses, contracts, permits, and authorizations to undertake these activities. The amendments also authorize the government to declare other minerals as "strategic resources" that would allow greater state control in the future. As of December 31, 2024, the Mexican Government was still drafting implementing measures for the amendments. The United States continues to monitor Mexico's implementation of these amendments. In August 2024, the Constitutional Committee of Mexico's Chamber of Deputies approved a proposed constitutional amendment that would ban open-pit mining activities relating to the exploration, exploitation, benefit, or use of minerals, metals, and metalloids, except in cases determined by the Government of Mexico for strategic national development reasons. As of December 31, 2024, the proposed amendment had not been voted on by the full Chamber of Deputies. Restricted Sectors Mexico restricts foreign investment in certain sectors under the Foreign Investment Law. Certain sectors, such as transportation infrastructure, are entirely closed to foreign investment. Foreign ownership is capped at 49 percent for express delivery companies and land for agricultural, livestock, and forestry purposes, as well as port administration services.	FOREIGN TRADE BARRIERS 267
FOREIGN TRADE BARRIERS 268	268 FOREIGN TRADE BARRIERS

► El gobierno de Estados Unidos cuestiona control estatal de litio, petróleo y electricidad en México

Fecha 10.03.2026	Sección Revista	Página PP.3-4-13
----------------------------	---------------------------	----------------------------



► Claudia Sheinbaum y Donald Trump sostienen reunión sobre Copa Mundial de la FIFA 2026